

Izquierda Republicana ha estimado siempre, y continúa estimando, que la máxima fuerza moral y jurídica de la Causa de la República Española, ante la opinión nacional como ante la extranjera, reside en su legitimidad indiscutible, como régimen que el pueblo se dió libremente, y que revalidó en todas las manifestaciones del sufragio que se celebraron en España desde su instauración hasta que, víctima de una conjura del fascismo internacional contra el que han combatido las naciones vencedoras en la pasada contienda, el pueblo español se vió brutalmente despojado de sus libertades y sometido a un régimen de opresión.

Estos títulos confieren al régimen republicano en España una evidente superioridad en Derecho, no sólo sobre el que actualmente detenta el poder en nuestro país bajo la férula de Franco, sino también sobre el monárquico, repudiado de manera inequívoca y contundente por la Nación en una memorable jornada electoral organizada y presidida por la propia Monarquía, que determinó su derrocamiento y la implantación de la República, clamorosamente plebiscitada. A tal punto, que si monárquicos sinceramente demócratas y liberales quedaran en España, habrían de reconocer también, sin renunciar a sus convicciones, la legitimidad de la República, con un criterio democrático que, más o menos respetado en la práctica, es el universalmente reconocido y proclamado como válido.

Estas son, fundamentalmente, las razones por las cuales Izquierda Republicana fué ferviente y entusiasta partidaria de reconstituir en el exilio las Instituciones representativas de la República, y les ha venido prestando su inquebrantable adhesión y su decidido apoyo, sin que una y otro signifiquen siempre identificación con todos los actos políticos de sus distintos órganos.

Izquierda Republicana no desconoce las deficiencias y aun las anomalías inevitables que imponen a la estructura y al funcionamiento de las Instituciones las circunstancias anormales en que han de desenvolverse y para las que, naturalmente, no fueron previstas, pero considera que por encima de estas deficiencias y anomalías importa la autoridad que confiere a las Instituciones su valor representativo del único régimen legítimo de España, en tanto el pueblo español no recupere la libre disposición de sus destinos y pueda hacer pleno uso de su soberanía, hoy usurpada.

Esta posición de Izquierda Republicana ha sido calificada de intransigente y de carente de realismo político, considerándose por algunos que su pretendida rigidez obstaculiza en la práctica una posible solución del problema español.

Izquierda Republicana declara que el proclamar y sostener la legitimidad de la República, frente al poder usurpador y tiránico de Franco y frente a las pretensiones monárquicas, no significa, ni tiene por qué significar, renuncia, ni menos oposición, en principio, a ningún procedimiento que pueda promover la restitución ple-

na y efectiva de la libertad política al pueblo español, y le ofrezca la coyuntura, con todas las garantías exigibles, de manifestar su voluntad, y de designar a sus legisladores y gobernantes por medios auténticamente democráticos. A lo que Izquierda Republicana se opondrá siempre es a todo intento de resolver y liquidar el llamado problema español mediante una trágica superchería que suponga una falsificación de solución democrática y un escamoteo de la soberanía popular.

La insospechada y dolorosa quiebra de las esperanzas que todos los demócratas españoles habían puesto en las felices consecuencias que para España había de tener el triunfo de las naciones que decían defender la Libertad y la Democracia, sobre las potencias fascistas que impusieron al pueblo español el régimen de opresión que aun padece; la supervivencia de ese régimen al amparo de las rivalidades surgidas entre los vencedores de la pasada guerra; la pasividad, las reticencias y aun la complicidad vergonzante de las naciones rectoras del mundo democrático con un régimen que es objeto de la aversión de todos los pueblos, y que fué solemne y categóricamente condenado por la Organización de las Naciones Unidas; todo esto, ha entibiado muchos entusiasmos, minado muchas energías y sembrado la confusión, la dispersión y el desánimo en las filas de los defensores de la República.

Es preciso reaccionar contra ese estado de espíritu.

A pesar de todas las desilusiones de nuestra amarga experiencia y de todas las circunstancias adversas que prolongan el aherrojamiento del pueblo español, la Causa de la República no está perdida. Mientras haya españoles en quienes aliente el ansia de libertad, el régimen oprobioso que hoy los sojuzga se encaminará fatalmente a un desenlace, y el deber sagrado de todos los hombres y de todas las organizaciones políticas y sociales del campo de la democracia republicana es combatir por acelerarlo y para, cuando llegue, sacar de él los mejores frutos para el porvenir de nuestra Patria. Tenemos que persuadirnos de que la liberación del pueblo español ha de ser, fundamentalmente, obra de los españoles mismos, y esta convicción debe presidir la nueva etapa que es imperioso iniciar con renovados ímpetus en la irrenunciable empresa liberadora.

La condición primera e indispensable de la eficacia en la acción liberadora de las fuerzas democráticas y republicanas se halla en la cooperación estrecha de todas ellas. Es menester, ante todo, recobrar conciencia plena de la solidaridad que las une y que debe traducirse en un compromiso de alianza sagrada e indisoluble hasta el logro de lo que son sus objetivos comunes: el derrocamiento de la tiranía franquista, y la restauración y la consolidación en España de un régimen republicano democrático, de libertad y de justicia, que abra cauce adecuado al bienestar y al progreso de la Nación.

Cualquier iniciativa aislada de alguno de los grandes sectores de opinión del campo republicano, que tenga como primera consecuencia el romper esa solidaridad, es, por definición, nociva pa-

ra la Causa de la República, por honrados que sean los móviles, y poderosas y justificadas que puedan parecer a sus promotores las razones que la abonen.

El patriotismo, el sentido de responsabilidad y el interés general, imponen a todos los partidos y organizaciones del campo republicano, el deber de constituir sin más dilaciones un frente único, por encima de divergencias doctrinales que hoy no se plantean, y de apreciaciones y criterios sobre el camino a seguir para alcanzar los objetivos comunes, que no son inconciliables. Hoy lo que nos une es de mucha mayor entidad e importa mucho más que lo que pueda separarnos.

No es necesario ni útil elaborar de antemano un plan sobre la táctica a seguir en la acción conjunta. La táctica es la resultante de las exigencias, de las posibilidades y de las conveniencias de cada hora. El frente antifranquista y republicano que proponemos debe edificarse sobre el reconocimiento de la necesidad de establecer unos lazos de alianza permanente entre todos los sectores del campo republicano, y de concertar en su seno la política y la actividad antifranquista y republicana de todos ellos en todos los planos en que la acción es posible: dentro y fuera de las Instituciones Republicanas en el exilio, como dentro y fuera de España; cerca de la opinión, de las organizaciones democráticas y de los gobiernos extranjeros, como cerca de la opinión española de la emigración y, muy especialmente, del interior de nuestro país.

Las invocaciones y los llamamientos a la unidad han partido de todos los sectores, respondiendo a un sentimiento, cada vez más extendido y acuciante, de la necesidad imperiosa de lograrla. Con la noble preocupación, sin duda, de eliminar las dificultades que parecen derivarse de posiciones hasta ahora divergentes y de concepciones dispares, se ha llegado a buscar la coincidencia en la acción, limitando los objetivos al derrocamiento del franquismo. Voces autorizadas se han pronunciado en este sentido, y este criterio se ha concretado recientemente en una propuesta de creación de un frente antifranquista, vaciándolo de todo contenido programático y cimentándolo en la sola afirmación de la convicción antifranquista y antitotalitaria. Reconocemos el buen deseo y el elevado afán que han presidido tales llamamientos e iniciativas, pero creemos que encierran un profundo error. La unidad con ser indispensable, es en sí misma un medio y no un fin. Si para llegar a la unidad de acción de los partidos y organizaciones del campo republicano hubiera que renunciar a todo acuerdo y compromiso de signo positivo, que ilustre a la opinión sobre los propósitos de las fuerzas coaligadas para una vez que el franquismo haya sido derribado, y sea una garantía para España y para el mundo de solución estable y solvente, Izquierda Republicana considera que los resultados serían contraproducentes, pues implicarían una terrible confesión de impotencia y de incapacidad para asegurar la sustitución directa o indirecta del franquismo, que es lo que más importa dentro y fuera de España.

Izquierda Republicana estima, por el contrario, que la primera tarea que incumbe a las organizaciones republicanas es la de elaborar